

**Chillán, trece de enero de dos mil veinticinco.**

**Visto:**

Se han elevado estos autos **Rol C-5952 del Primer Juzgado Civil de Chillán**, por haberse interpuesto recurso de casación en la forma y de apelación por la demandada y recurso de apelación por la demandante, en contra de la sentencia definitiva de veintisiete de julio de dos mil veinticuatro, que acogió la demanda deducida por ENAP refineras S.A. en contra de Prestaciones Médico Docente Marcela Pérez y Compañía Ltda., actualmente denominada Inversiones Marcela Pérez SpA y constituyó el derecho real de servidumbre para tender tuberías o red de cañerías de oleoducto, atravesar o cruzar subterráneamente a través del inmueble del demandado. Asimismo, ordenó la constitución de servidumbre de tránsito en el mismo inmueble, en favor de la demandante y fijó la indemnización, cuyo pago deber soportar el actor, para ejercer las servidumbres solicitadas, en la suma de \$19.956.703.- deberá ser reajustada según la variación de Índice de Precios al Consumidor entre la fecha de la sentencia y el pago efectivo.

Se trajeron los autos en relación.

**Considerando:**

**I.- En cuanto a la objeción de documentos:**

**1°.-** Que, en segunda instancia, a folio 21, el 23 de octubre de 2024, la parte demandante, ENAP refineras S.A. acompaña, con citación, Decreto N° 60 de 8 de enero de 1966, del Ministerio de Tierras y Colonización.

Tal documento fue objetado, a folio 23, por el abogado de la parte demandante por falta de integridad, en atención a que la copia acompañada se encuentra incompleta en su lado derecho, además de la baja calidad del documento impiden corroborar la veracidad de los timbres y sellos que acreditarían su autenticidad. Solicita tener por objetado el documento y restarle todo valor probatorio.

De la objeción se confirió traslado a la contraria a folio 41, el que se tuvo por evacuado en rebeldía con fecha 23 de diciembre de 2024.

**2°.-** Que la parte demandante, a folio 39, el 11 de diciembre de 2024, acompaña, con citación, Decreto N° 60 de 8 de enero de 1966, del Ministerio de Tierras y Colonización.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XXGFXSEQTWE

A folio 42 la demandada objeta el referido documento señalando que adolece de falta de integridad, porque la baja calidad del documento no permite inteligir timbres ni sellos de ninguna especie, haciendo imposible verificar la autenticidad del documento. Solicita tener por objetado el documento por falta de integridad y restarle todo valor probatorio.

A folio 47, el 23 de diciembre de 2024, la parte demandante evacúa el traslado conferido solicitando el rechazo con costas de la objeción. Señala que la demandada confunde dos causales de impugnación que son la falta de integridad y la falta de autenticidad, que la primera es aplicable a los instrumentos privados y la segunda a los instrumentos públicos. Precisa que el documento acompañado es un instrumento público y que la falta de autenticidad debía ser probada por quien la alega, sin perjuicio de lo cual afirma que el documento es auténtico.

**3°.-** Que el documento consistente en el Decreto N° 60, de 18 de enero de 1966, del Ministerio de Tierras y Colonización es un instrumento público y la demandada lo ha objetado a folio 23 y 42 por falta de integridad.

Sin embargo, tal causal de objeción es improcedente en la especie, desde que ella es aplicable a los instrumentos privados, conforme a lo dispuesto en el artículo 346 N° 3 Código de Procedimiento Civil, lo que bastaría para rechazarla. A mayor abundamiento, el documento acompañado a folio 39 se lee íntegramente.

En consecuencia, las objeciones opuestas a folio 23 y 42 deben ser desestimadas.

**II.- En cuanto al recurso de casación en la forma interpuesto por la demandada:**

**4°.-** Que la demandada deduce recurso de casación en la forma en contra de la sentencia definitiva referida en lo expositivo, invocando la causal del artículo 768 N°7 del Código de Procedimiento Civil, esto es, contener decisiones contradictorias.

Al explicar la causal indica que el juez el juez a quo razona en base a una hipótesis enteramente errada, pues entiende que la servidumbre que se le pide constituir ya existiría, y que por tanto la cuestión controvertida sólo radicaría en la determinación del monto de la indemnización a la que el predio sirviente tiene derecho. Así lo consigna en los considerandos décimo y décimo tercero.

Añade que a partir de esa decisión el sentenciador construye conclusiones equivocadas y declara que se trataría de una servidumbre “de facto” a la que la



sentencia sólo estaría llamada a proveer de “reconocimiento jurídico por la vía judicial”; que ello no forma parte de la controversia porque el demandante solicitó correctamente al tribunal la constitución de las servidumbres en la forma en que expresamente lo dispone la ley.

Luego de transcribir los artículos 121 a 123 del Código de Minería indica que contrariamente a los razonamientos contenidos en los considerandos de la sentencia, llegada la parte resolutive, el juez optó por ajustarse al mandato legal y constituir aquellas servidumbres que antes declaró existentes.

Afirma que tal proceder ha llevado a que la sentencia contenga decisiones contradictorias, que no sólo infringen las respectivas normas de procedimiento, con la consiguiente sanción de nulidad, sino que vulnera los derechos de su representada, pues en base a la hipótesis de la existencia de una servidumbre de facto que su parte debía respetar, decide rechazar los fundamentos que hacían procedente la indemnización de todo el daño ocasionado.

Arguye que, si las servidumbres ya existían, como lo declara el juez en el cuerpo de la sentencia, resulta evidente que su parte debió conformarse a las reglas de comportamiento que se señalan, y por tanto resultaba jurídicamente improcedente que el sentenciador procediese a su constitución en la parte resolutive. El efecto de tal contradicción es que en base a la primera decisión se priva a su parte de una indemnización a la que manifiestamente tendría derecho en base a la segunda.

Concluye señalando que el vicio denunciado hace ininteligible al fallo, porque se trata de decisiones lógicas y jurídicamente incompatibles entre sí y que la falta ha sido cometida en el pronunciamiento mismo de la sentencia, por lo que no es necesaria la preparación del recurso.

Termina solicitando que se invalide la sentencia recurrida, dictando acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente, una sentencia de reemplazo que se conforme a lo dispuesto por el artículo 122 del Código de Minería ordenando que su parte sea indemnizada “por todo perjuicio que se cause al dueño de los terrenos”, los que han sido debidamente establecidos mediante los informes periciales que obran en autos, todo ello con costas.

**5°.-** Que en cuanto a la causal de nulidad contenida en el número 7 del artículo 768 N° 7 del Código de Procedimiento Civil, esto es, que la sentencia recurrida contenga decisiones contradictorias, preciso es tener presente que ello



ocurre cuando las que contiene el fallo son incompatibles entre sí, de manera que no pueden cumplirse simultáneamente, pues interfieren unas con otras.

En tal sentido, la Excma. Corte Suprema ha señalado que *“(…) para entender concurrente el vicio en referencia es requisito que la sentencia contenga dos o más decisiones antagónicas o incompatibles entre sí, de manera que no sea posible cumplirlas porque se contradicen y no se pueden obedecer simultáneamente. Contradictorias son aquellas proposiciones en que una afirma lo que la otra niega, como si por un lado se declara resuelto un contrato y por otro se ordena el cumplimiento del mismo, o si se rechaza una demanda en su totalidad, pero al mismo tiempo se declara que alguna de las peticiones contenidas en la misma queda acogida, aunque sea parcialmente.”*

6°.- Que el recurrente estima que el vicio se produce porque en algunos de los considerandos del fallo se hace referencia a que la servidumbre -cuya constitución se demanda- ya existía “de facto” y luego, en lo resolutivo, la jueza declara que aquella se constituye.

Sobre el particular, ha de señalarse que la causal invocada exige que las contradicciones estén contenidas en la parte resolutive del fallo y no en otra de sus secciones, porque aquella es la que contiene las decisiones. Así lo ha señalado el Máximo Tribunal en la sentencia citada en el motivo precedente, agregando que *“(…) la contradicción de un considerando con lo decisorio no implica la concurrencia del vicio, ya que lo que prima es la determinación que se adopte, aun cuando no concuerde con la fundamentación de la misma.”* Tal consideración bastaría para desechar el recurso.

7°.- Que, sin perjuicio de lo señalado precedentemente, la lectura del fallo permite constatar que ninguna contradicción existe entre las decisiones contenidas en lo resolutivo, pues éstas no son incompatibles ni imposibles de cumplir simultáneamente; en consecuencia, el recurso de casación será desestimado.

### **III.- En cuanto al recurso de apelación de la parte demandada :**

**Se reproduce la sentencia en alzada y se tiene además presente:**

8°.- Que la demandada deduce recurso de apelación afirmando que el sentenciador ha creado un derecho real nuevo, consistente en la servidumbre de facto.

Argumenta que tal especie de servidumbre jamás fue parte de los argumentos vertidos en el proceso y que lo obrado por el juez a quo resulta



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XXGFXSEQTWE

completamente antijurídico, toda vez que sólo toca al legislador crear derechos reales y son tales los contemplados en el artículo 577 del Código Civil. Sostiene que tal error conforma la base de la decisión del juez en cuanto a rechazar la pretensión indemnizatoria de su parte, y por tanto del agravio inferido al apelante y que el tribunal de alzada debe rectificar conforme a derecho la sentencia, eliminando toda referencia a estos derechos reales nuevos creados por el sentenciador, y por consiguiente declarando el derecho de su parte a ser indemnizada por todo el daño que la constitución de las servidumbres le ocasiona.

Manifiesta que sobre el inmueble de autos no pesan servidumbres de ninguna especie, lo que se infiere de la propia sentencia impugnada, pues el juez a quo ha ordenado constituir las servidumbres objeto de la demanda; que las facultades del dominio sólo quedan limitadas en la forma y circunstancias expresamente señaladas por la ley y que las servidumbres de autos se regulan por el Código de Minería, en los artículos 121 y siguientes.

Destaca que el propietario subdividió su inmueble en lotes y lo dio en arrendamiento a largo plazo para la construcción de un parque fotovoltaico; que las servidumbres demandadas afectan a esos lotes e impiden al arrendatario el cabal ejercicio de sus derechos y por consiguiente debe indemnizarse todo perjuicio que se cause al dueño del terreno, no obstante, el juez rechazó esa indemnización fundado en un inexistente derecho real de servidumbre “de facto” y además declara que el propietario habría obrado de manera negligente y de mala fe.

Reitera el argumento esgrimido en el recurso de casación relativo a que la sentencia contiene una contradicción que conculca los derechos del propietario, en cuanto por un lado indica que el inmueble lleva décadas gravado “de facto” y luego resuelve constituir las servidumbres demandadas. Destaca que si las servidumbres no existían (como se decide al final), el reproche que la sentencia fórmula para denegar la indemnización resulta jurídicamente imposible.

Sostiene que la sentencia infringe el artículo 122 del Código de Minería que concede derecho a indemnización por todo el daño ocasionado y decide conceder solo una porción de éste, no obstante que los tres informes periciales coinciden en que el daño que ocasiona la constitución de las servidumbres afecta varios lotes de terreno, llegando a una valorización mínima del daño que al menos triplica lo señalado en la sentencia. Además, ha sido dictada en contra del mérito del proceso.



Indica que la sentencia pretende que la existencia de una tubería enterrada en el predio sublite constituye un hecho público y notorio y sin embargo tal hecho ha debido probarse mediante un informe de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Afirma que el sentenciador no juzga la controversia con un mismo estándar, pues mientras las pretensiones del demandante son sopesadas conforme las reglas generales y se le admite prueba de los hechos, para juzgar la pretensión indemnizatoria del propietario se aplican las reglas especiales del hecho público y notorio liberando el juez al actor de la necesidad de prueba. Tal diferencia de criterios resulta manifiestamente injusta y agravante a sus derechos. La existencia de un oleoducto o cañería transportadora del hidrocarburo, que hoy estaría señalizada, anunciada y proclamada por ENAP no ha estado así siempre; y en el proceso no existe prueba alguna de que las actuales condiciones sean las mismas de años anteriores.

Por último, afirma que la sentencia valida el obrar antijurídico de ENAP y declara que al actuar de facto adquirió derechos reales.

Termina solicitando que se acoja el recurso y se rectifique conforme a derecho la sentencia impugnada y en su lugar ordene que la demandada sea indemnizada “por todo perjuicio que se cause al dueño de los terrenos” conforme lo dispone el artículo 122 del Código de Minería, fijando el monto de dicha indemnización conforme al mérito del proceso según ha sido estimado por los informes periciales que obran en autos, todo ello con expresa condenación en costas al actor.

**9°.-** Que lo que el recurrente denomina la creación de una nueva categoría de servidumbre por parte de la jueza a quo, correspondiente a la “servidumbre de facto”, corresponde a los razonamientos efectuados en la sentencia y a la ponderación de los medios de prueba producidos.

Al respecto, en la causa no se controvirtió la existencia del trazado del oleoducto en la propiedad de la demandada, de manera que, tal como se señala por la jueza, la demanda tiene por objeto obtener el reconocimiento jurídico de una situación existente hace largos años. En tal sentido, y dado que las pretensiones indemnizatorias de la demandada se fundan en la supuesta afectación del loteo que efectuó en su propiedad y de un contrato de arrendamiento para la ejecución de un proyecto fotovoltaico, no se puede soslayar que, conforme al mérito de la prueba rendida, la demandada adquirió el inmueble el año 2019, conociendo la existencia del oleoducto, pues, por un lado las fotografías acompañadas a los informes periciales dan cuenta de la señalética existente en el lugar y, por otro, la



demandada no alegó desconocimiento del oleoducto; por el contrario, su existencia no fue controvertida.

Así las cosas, resultando claro que la demandada ejecutó los proyectos y actos jurídicos que ahora estima afectados por la constitución de la servidumbre, conociendo la existencia del oleoducto en su terreno, tales circunstancias no pueden ser consideradas como un daño que deba ser indemnizado, la indemnización fijada por la jueza a quo resulta ajustada al mérito de los perjuicios efectivamente sufridos por la demandada.

#### **IV.- En cuanto al recurso de apelación de la parte demandante:**

**10°.-** Que el abogado de la demandante ENAP refineras S.A. interpone recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva de 27 de julio de 2024 en aquella parte que estableció la indemnización en favor de la demandada en la suma de \$19.956.703, reajustables conforme a la variación del índice de precio del consumidor entre la fecha de la sentencia y aquella en que se verifique el pago efectivo.

Sostiene que el fallo impugnado incurre en serios errores de fundamentación en relación con el monto fijado.

Detalla que para llegar a esta suma el tribunal tomó en consideración la tasación establecida en el informe elaborado por el perito José Huentupil Aldea, que concluye que el valor del metro cuadrado en el predio de la demandada es \$5.397, lo que multiplicado por la superficie de la servidumbre – 3.697,74 metros cuadrados – da el valor determinado en la sentencia de \$19.956.703.

Afirma que si bien la operación aritmética es correcta, no lo es el razonamiento que se esconde tras ella, pues el perito indica en el informe que se consideró “ofertas de predios similares considerando que el terreno en cuestión se encuentra loteado y el arriendo realizado para la instalación del parque fotovoltaico, enumerándose 8 casos de supuestas inscripciones en el Conservador de Bienes de Chillán, que darían en promedio \$5.397 por metro cuadrado. Sin embargo, el perito asume, erróneamente, que las parcelas 12 y 19, por formar parte del trazado del oleoducto “no podrán ser comercializadas y se podría suponer una pérdida de patrimonio”. Y sin perjuicio de que no se acompañaron las inscripciones y demás antecedentes asociados a los predios que sirvieron de referencia para determinar el valor del perjuicio por metro cuadrado, impidiendo que se pueda confirmar que efectivamente dichas inscripciones existen y se refieren a inmuebles con características similares al inmueble de autos, lo cierto es



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XXGFXSEQTWE

que se trata de un número muy limitado de casos, de manera que no puede estimarse como un parámetro medianamente plausible para los efectos de la indemnización que corresponde al demandado.

Hace presente que de ninguna manera la constitución de la servidumbre puede suponer un mayor gravamen para el propietario del predio sirviente, que lo estrictamente necesario para ejercer el derecho de servidumbre; que la servidumbre no implica, como se sostiene en el informe, que dichos lotes no podrían ser comercializados; que la demandada sigue siendo dueña del predio y de los lotes en cuestión, viéndose sólo limitado su dominio, pero no privada de él.

Añade que el avalúo fiscal del predio de la demandada corresponde a \$339.644.916, y tiene una superficie de 305.200 metros cuadrados, según sus títulos; que el valor por metro cuadrado, conforme al avalúo fiscal, es de \$1.112,86 y que multiplicando ese valor por la superficie afecta al gravamen da un total de \$4.114.466; que si bien el avalúo comercial suele ser mayor, tampoco se justifica una diferencia de una magnitud contenida en la sentencia (casi del 500%). Destaca el demandado no ha “perdido” el dominio de ese terreno, por lo que resulta excesivo el monto fijado como indemnización.

Termina solicitando que esta Corte enmiende con arreglo a derecho la resolución recurrida, la revoque en lo apelado y rebaje el monto de la indemnización determinada en favor de la demandada a la suma de \$4.114.466, o a la suma menor a \$19.956.703, que se determine de acuerdo con el mérito del proceso, confirmando la sentencia en lo demás. Todo lo anterior, con costas.

**11°.-** Que, no es efectivo que en la determinación del valor del metro cuadrado en el predio de la demandada se haya considerado que las parcelas 12 y 19 no podrán ser comercializadas, pues tal concepto es abordado por el perito de manera separada y con posterioridad a que fija el valor del metro cuadrado, asignando a cada una de aquellas un valor en razón de su superficie.

Asimismo, de la lectura del dictamen pericial aparece claro que el valor comercial del terreno afectado por la servidumbre, fue calculado considerando el valor promedio de terrenos agrícolas de la comuna de Chillán de características similares, lo que arrojó la suma de \$ 5.397 por metro cuadrado, que multiplicado por la superficie de la servidumbre arroja un total de \$ 19.954.868, tal como se estableció en la sentencia que se revisa.





**12°.-** Que en nada altera lo concluido el documento acompañado a folio 21 y 39 por la parte demandante, consistente en el Decreto 60, de 18 de enero de 1966 del Ministerio de Tierras y Colonización.

En efecto, tal documento, da cuenta de la destinación a la Empresa Nacional de Petróleo en uso gratuito y por diez años renovables de una faja de 10 metros de ancho en los cruces de los ríos que indica para la instalación de cañerías o ductos que permitan unir la refinería de petróleo de Concepción con las zonas de consumo de la zona central y hasta su conexión con el oleoducto que llega hasta San Fernando; sin embargo, tal circunstancia, relacionada con la existencia del oleoducto no resultó controvertida y su consideración en nada altera la decisión del pleito.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y lo dispuesto en los artículos 186, 187, 207, 342, 764, 766, 768, 786 del Código de Procedimiento Civil, se declara:

**I.-** Que **se rechazan** las objeciones deducidas a folios 23 y 42 del expediente digital de esta Corte.

**II.-** Que **se rechaza el recurso de casación en la forma** interpuesto por el abogado José Lagos Velasco en representación de la demandada, contra la sentencia de veintisiete de julio de dos mil veinticuatro, dictada en causa Rol C-5952-2019 del Primer Juzgado Civil de Chillán.

**III.-** Que **se confirma** en todas sus partes la referida sentencia.

**IV.-** Cada parte soportará sus costas.

Redactada por la ministra Erica Pezoa Gallegos.

No firma el abogado señor Ortega, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por no haber integrado hoy.

**Rol 638-2024 (acumulada 639-2024) Civil.**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XXGFXSEQTWE

Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Chillan integrada por Ministro Presidente Claudio Patricio Arias C. y Ministra Erica Livia Pezoa G. Chillan, trece de enero de dos mil veinticinco.

En Chillan, a trece de enero de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XXGFXSEQTWE